Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **00730/INFOEM/IP/RR/2024,** interpuesto por un particular que al momento de ingresar la solicitud de información e interponer el recurso de revisión, no señaló nombre o seudónimo con el cual desee ser identificado,en lo sucesivo **el Recurrente**, en contra de la respuesta de la **Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM)**, en lo subsecuente **El Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S D E L A S U N T O**

**PRIMERO.** **De la Solicitud de Información.**

Con fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, **El Recurrente**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** ante **El Sujeto Obligado**, solicitud de acceso a la información pública, registrada bajo el número de expediente **00012/FAAPAUAEM/IP/2023**,mediante la cual solicitó información en el tenor siguiente:

*“Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley General y Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito: 1. El listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación. 2. El listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación. 3.- Requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación. 4.- Cómo es posible que se le haya r4ealizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin ser maestro de la Universidad y seguramente tampoco esta afiliado a la Faaapa. 5. Como es que el titular del órgano interno de control, garantizo el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la preste n a cualquiera, que dejo en garantía. 6. Que se explique si a caso no se configura un conflicto de interés ya que es el Titular del órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar. Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica.”* [Sic]

Modalidad de entrega: A través del **SAIMEX**.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

En el expediente electrónico formado en el sistema **SAIMEX**, se aprecia **El Sujeto Obligado** emitió su respuesta a la solicitud de información, en fecha diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, en los términos siguientes:

*“Folio de la solicitud:* ***00012/FAAPAUAEM/IP/2023***

*Con el envío de un cordial saludo y en atención a su solicitud con número de folio 00012/FAAPAUAEM/IP/2023, presentada el siete de diciembre del año dos mil veintitrés donde refiere lo siguiente: “Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley General y Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito: 1. El listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación. 2. El listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación. 3.- Requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación. 4.- Cómo es posible que se le haya r4ealizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin ser maestro de la Universidad y seguramente tampoco esta afiliado a la Faaapa. 5. Como es que el titular del órgano interno de control, garantizo el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la preste n a cualquiera, que dejo en garantía. 6. Que se explique si a caso no se configura un conflicto de interés ya que es el Titular del órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar. Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica.” (sic). me permito informar con lo siguiente: 1****. El listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación****. Por este medio hago de su conocimiento y en atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 12, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que respecto al padrón de ahorradores de esta Organización Sindical, la Federación tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; la federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado; en este sentido le informo que esta Organización Sindical, no puede informar a su petición; toda vez que de darse a conocer lo solicitado, se estarían violentando datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 2.* ***El listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación****. Por este medio hago de su conocimiento y en atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que La transparencia Sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, así como en los artículos 92, 99 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y en virtud de lo anterior el artículo 12 que a la letra dice: “…Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.” Por lo que informo que las aportaciones sindicales provienen de particulares (nuestros agremiados), por tal motivo son aportaciones privadas, no provienen de recursos públicos; sin embargo y de acuerdo al artículo 102 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene como propósito proporcionar el padrón de socios motivo por el cual dejo liga para su consulta: https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/FAAPAUAEM/art\_102\_iii/5.web?token=03AFcWeA5T03eMyehuMPCpQbLZz0WYS1mrAfLxMOekMNGfxqSunSimLIKWDp58hOu8OmCOAKWU0-9hcBP8drvn8Y0iGHgUzWVfBYFK\_YwJzol14FKZNzV8WRYLa5rWV6FgeJFwoftXG0mYmMBnLdXU0HCB3gHDjHnjrH4tB5ndgK4QxCaz0dvlauO6e0ui7MIiDoI9\_THO55Qd3qvHOhrsysfaYQPSNGFEFvCDYkPbMD\_MS1BV1GAixZ4cCriAPPJcpsd8mvS3AaoQhmykDJS2cvkZScmXBEecBPFWjJ0vPsqXY00b2esAI4CBAtqdr0dO7falxW2VN0m7RFhw792B2pLSMIdmZcEuAm6T4k8rxBPlMgjer2TFWEaRixMe-\_p8i\_98rhnSMHYKECsLHxusv20OoQqV0yBNpi-Ijt5rprWNTOCnBph7nqB83iQJpJtss49xoaNnDFX-FUnevCrz9l8\_OLCUywOBLKxmyCsNckiTOnplzW3OrOSH6\_NZZupQaDlH63vdMypJKj7Pwh7MRFqvDuWvXYDOE\_ckT3EXJ5aMzhTMbmNsJCv5eyEnOkchlufQJ3Km3-yl 3.-* ***Requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación****. De acuerdo a su inquietud informo que los requisitos los encuentra en el Capítulo III, Artículo 13 del Reglamento de Caja de Ahorro. La transparencia Sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, así como en los artículos 92, 99 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 4.-* ***Cómo es posible que se le haya r4ealizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México****, sin ser maestro de la Universidad y seguramente tampoco esta afiliado a la Faaapa. En atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que la transparencia sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece a la letra lo siguiente: “…Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no es competente para atender su pregunta, en el entendido de que esta Organización Sindical tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; hago de su conocimiento que esta federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado. Señalado lo anterior y con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 5.* ***Como es que el titular del órgano interno de control, garantizo el pago de las mensualidades de dicho prestamos****, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la preste n a cualquiera, que dejo en garantía. En atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que la transparencia sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo; el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, estableciendo a la letra lo siguiente: “…Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no es competente para atender su solicitud de información pública en el entendido de que tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; hago de su conocimiento que esta federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado. Señalado lo anterior y con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 6.* ***Que se explique si a caso no se configura un conflicto de interes ya que es el Titular del órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar****. Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica A través de este medio se hace del conocimiento que en relación a lo referido, esta información no puede ser atendida por ésta vía, ya que se deriva de un juicio de valor y por lo tanto no es considerado como un derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece a la letra lo siguiente: “…Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; por lo que esta federación, únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado. Sin mas por el momento, quedo de usted.*

*ATENTAMENTE*

*M. en Ed. Areli Patoni Acosta”*

Para tal efecto, el Sujeto obligado adjuntó el archivo electrónico denominado “***respuesta12.pdf***”; mismo que no se inserta en el presente apartado por ser del conocimiento de las partes; sin embargo, habrá de hacerse el análisis y estudio correspondiente en párrafos posteriores.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta del **Sujeto Obligado**, **El Recurrente** interpuso el recurso de revisión, en fecha ocho de febrero de dos mil veinticuatro, quedando registradoen el sistema electrónico con el expediente número **00730/INFOEM/IP/RR/2024**, en el cual arguye, las siguientes manifestaciones:

1. **Acto Impugnado:**

*“la respuesta proporcionada por la FAAPAUEM” [sic]*

1. **Razones o Motivos de Inconformidad**:

*“En términos de los artículos 176, 178, 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vengo a interponer mi garantía secundaría en contra de la supuesta respuesta de la Federación de Asociaciones Autónoma del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, bajo el tenor de los siguientes argumentos. 1 Es falso que no me pueden proporcionar en versión pública el padrón de beneficiarios si la misma ley refiere en su artículo 102 fracción III refiere que deben proporcionar el “padrón de socios, afiliados o análogos” razón por la cual se solicitó desde un principio se me proporcionará la información en versión pública, protegiendo los datos personales de cada uno de los que conforman el padrón de socios, afiliados o análogos asimismo dicho artículo refiere que solamente podrá ser clasificada como confidencial los domicilios de los socios, afiliados o análogos. 2* ***Es falso que no me pueden proporcionar en versión pública el listado completo de los que realizan aportaciones sindicales a dicha Federación****, si la misma ley refiere en su artículo 102 fracción IV refiere que deben proporcionar la relación de los recursos públicos económicos, en especie viene o donativos y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos.”, por lo que si bien es cierto dichas aportaciones las hacen los trabajadores de la Universidad, estas aportaciones se hacen del sueldo que perciben los trabajadores, es decir son recursos públicos y se debe manifestar que qué y para qué se usa dicho recurso. 3 4 Si bien es cierto que los sujetos obligados solo proporcionan la información que se genera posee o administre, según su propia respuesta, solicito la expresión documental, en términos del criterio 16/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de todo lo relacionado con el préstamo que se realizó al C. XXXX XXXXXX XXXX sin cumplir con el requisito de ser docente. 5 Se sospecha que la FAAPA oculta información toda vez que la solicitud es muy clara,* ***solicito todo los documentos relacionados con el préstamo tan exuberante que recibió el C. XXXXX XXXX XXXXXX, información que obra en sus archivos y que pretende evadir la solicitud, la cual es muy clara****. 6 Se sospecha que la FAAPA oculta información toda vez que la solicitud es muy clara, ya que* ***se solicitó justificar el préstamo realizado al C. XXXXX XXXXXX XXXX, esto debe entenderse como, demostrar, manifestar obviamente bajo documentales cuáles fueron las razones para otorgar dicho recurso****. Por lo anterior y en términos del artículo 13 de la ley de la materia, solicito de al INFOEM, la suplencia de la queja y ordene la entrega de la información que se solicitó en la solicitud de mérito” [sic]*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico, en términos del arábigo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de admisión en fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de instrucción.**

Así, una vez abierta la etapa de instrucción, en el sumario se observa que **El Sujeto Obligado** en fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, presentó su informe justificado, mismo que fue puesto a la vista del **Recurrente** el día veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, para que en un término de tres días **el Recurrente** adujera manifestaciones; asimismo, se hace constar que **el** R**ecurrente** fue omiso en presentar sus manifestaciones respecto al informe justificado remitido por el **Sujeto Obligado**; finalmente se advierte de las constancias que integran el presente expediente, que no existe prueba alguna que deba desahogarse.

**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, permitió decretarse el cierre de instrucción en fecha veintiocho de junio de la presente anualidad, en términos del artículo 185, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**SÉPTIMO. De la ampliación del término para resolver.**

De las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que han transcurrido los términos de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

Este Instituto no pasa por alto justificar que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, que se ha incrementado aproximadamente un 400 %, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro «TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO», visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

«PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO», consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

«PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS», visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el Recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es preciso e importante señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.**

Los Recursos de Revisión en estudio contienen los elementos normativos de validez exigidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecidos en el artículo 180 que enuncia:

*“Artículo 180. El recurso de revisión contendrá:*

*I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II. El nombre del solicitante*** *que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

*III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

*IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

*V. El acto que se recurre;*

*VI. Las razones o motivos de inconformidad;*

*VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

*VIII. Firma del recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.*

***En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.” [Sic]***

Cabe señalar que la parte Recurrente no proporcionó un nombre o seudónimo para ser identificado al ejercer su derecho de acceso a la información pública; sin embargo, no es motivo para desechar las solicitudes de acceso a la información pública conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que señala lo siguiente:

*“****Artículo 55.(…)***

*Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.” [Sic]*

Robusteciendo lo anterior se encuentra lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece lo siguiente:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

*“Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*(…)*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.” [Sic]*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

*“Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.*

*(…)*

*Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*(…)*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho. Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

*(..)*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.*

*(…)*

*VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. (…)”* ***[Sic]***

Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca lo siguiente:

*“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” [Sic]*

Por lo cual, de una interpretación sistemática, conforme y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que, **incluso, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima** o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.

En conclusión, se cubrieron los requisitos de procedencia y procedibilidad y conforme a las constancias que obran en el expediente.

**CUARTO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad, los cuales deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

De lo anterior, el estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto, ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión, se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

Así las cosas, al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio por este Resolutor, se procede al análisis del asunto en los siguientes términos.

**QUINTO.** **Estudio y resolución del asunto.**

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Transparencia local.

En primer término es necesario hacer alusión a la solicitud de información ya que de ella deriva por un lado al procedimiento de acceso a la información ante el sujeto obligado, y por otro lado la materia sobre la que versara el recurso de revisión ante este Órgano Garante; se resalta la innegable necesidad de interpretar el texto de las solicitudes, porque no se podría entender el derecho de acceso a la información sin la existencia de solicitudes de información a la luz de su interpretación ya que ésta es la fuente de la materia objeto de la transparencia específica en cada recurso de revisión; es decir, no podemos establecer una materia o un tema como objeto de derecho de acceso a la información, si de la solicitud no se entiende o no se precisan temas o materias objetivas; por ello es de notoria importancia el trabajo de interpretación que se le dé a las solicitudes de información, ya que el sujeto obligado puede considerar una circunstancia en particular diversa a la que el particular objetivamente requiere.

Ya que el planteamiento del problema es de toral importancia, a efecto de determinar la intención o voluntad del Recurrente a la luz de la interpretación de las solicitudes de información, y que puede generar de forma objetiva y material el sujeto obligado que se relacione con esa intención, respecto del presente asunto se realiza a continuación.

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Federal y el diverso 8, de la Ley de Transparencia local.

Así, una vez analizada la solicitud de información, podemos determinar que objetivamente **El Recurrente** solicita el o los documentos en donde conste lo siguiente:

1. *Listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación.*
2. *Listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación.*
3. *Requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación.*
4. *Cómo es posible que se le haya realizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin ser maestro de la Universidad.*
5. *Como es que el Titular del Órgano Interno de Control, garantizó el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la preste n a cualquiera, que dejo en garantía.*
6. *Que se explique si acaso no se configura un conflicto de interés ya que es el Titular del Órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar.*
7. *Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica.*

Ahora bien, en respuesta a los requerimientos formulados por el particular, el **Sujeto Obligado** turnó la solicitud a las unidades administrativas que consideró competentes y emitió su respuesta, remitiendo para tal efecto un archivo electrónico, del cual se desprende la siguiente información:

* **“respuesta12.pdf”:** Escrito de fecha 17 de enero de 2024, a través del cual, el Titular de la Unidad de Transparencia comunica lo siguiente:

*“1.* ***El listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación****.*

*Por este medio hago de su conocimiento y en atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 12, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que respecto al padrón de ahorradores de esta Organización Sindical, la Federación tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; la federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado; en este sentido le informo que esta Organización Sindical, no puede informar a su petición; toda vez que de darse a conocer lo solicitado, se estarían violentando datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.*

***2. El listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación****.*

*Por este medio hago de su conocimiento y en atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que La transparencia Sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, así como en los artículos 92, 99 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y en virtud de lo anterior el artículo 12 que a la letra dice: “…Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.” Por lo que informo que las aportaciones sindicales provienen de particulares (nuestros agremiados), por tal motivo son aportaciones privadas, no provienen de recursos públicos; sin embargo y de acuerdo al artículo 102 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene como propósito proporcionar el padrón de socios motivo por el cual dejo liga para su consulta:*

[*https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/FAAPAUAEM/art\_102\_iii/5.web?token=03AFcWeA5T03eMyehuMPCpQbLZz0WYS1mrAfLxMOekMNGfxqSunSimLIKWDp58hOu8OmCOAKWU0-9hcBP8drvn8Y0iGHgUzWVfBYFK\_YwJzol14FKZNzV8WRYLa5rWV6FgeJFwoftXG0mYmMBnLdXU0HCB3gHDjHnjrH4tB5ndgK4QxCaz0dvlauO6e0ui7MIiDoI9\_THO55Qd3qvHOhrsysfaYQPSNGFEFvCDYkPbMD\_MS1BV1GAixZ4cCriAPPJcpsd8mvS3AaoQhmykDJS2cvkZScmXBEecBPFWjJ0vPsqXY00b2esAI4CBAtqdr0dO7falxW2VN0m7RFhw792B2pLSMIdmZcEuAm6T4k8rxBPlMgjer2TFWEaRixMe-\_p8i\_98rhnSMHYKECsLHxusv20OoQqV0yBNpi-Ijt5rprWNTOCnBph7nqB83iQJpJtss49xoaNnDFX-FUnevCrz9l8\_OLCUywOBLKxmyCsNckiTOnplzW3OrOSH6\_NZZupQaDlH63vdMypJKj7Pwh7MRFqvDuWvXYDOE\_ckT3EXJ5aMzhTMbmNsJCv5eyEnOkchlufQJ3Km3-yl*](https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/FAAPAUAEM/art_102_iii/5.web?token=03AFcWeA5T03eMyehuMPCpQbLZz0WYS1mrAfLxMOekMNGfxqSunSimLIKWDp58hOu8OmCOAKWU0-9hcBP8drvn8Y0iGHgUzWVfBYFK_YwJzol14FKZNzV8WRYLa5rWV6FgeJFwoftXG0mYmMBnLdXU0HCB3gHDjHnjrH4tB5ndgK4QxCaz0dvlauO6e0ui7MIiDoI9_THO55Qd3qvHOhrsysfaYQPSNGFEFvCDYkPbMD_MS1BV1GAixZ4cCriAPPJcpsd8mvS3AaoQhmykDJS2cvkZScmXBEecBPFWjJ0vPsqXY00b2esAI4CBAtqdr0dO7falxW2VN0m7RFhw792B2pLSMIdmZcEuAm6T4k8rxBPlMgjer2TFWEaRixMe-_p8i_98rhnSMHYKECsLHxusv20OoQqV0yBNpi-Ijt5rprWNTOCnBph7nqB83iQJpJtss49xoaNnDFX-FUnevCrz9l8_OLCUywOBLKxmyCsNckiTOnplzW3OrOSH6_NZZupQaDlH63vdMypJKj7Pwh7MRFqvDuWvXYDOE_ckT3EXJ5aMzhTMbmNsJCv5eyEnOkchlufQJ3Km3-yl)

***3.- Requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación****.*

*De acuerdo a su inquietud informo que los requisitos los encuentra en el Capítulo III, Artículo 13 del Reglamento de Caja de Ahorro. La transparencia Sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, así como en los artículos 92, 99 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

*4****.- Cómo es posible que se le haya r4ealizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin ser maestro de la Universidad y seguramente tampoco esta afiliado a la Faaapa****.*

*En atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que la transparencia sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece a la letra lo siguiente: “…Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no es competente para atender su pregunta, en el entendido de que esta Organización Sindical tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; hago de su conocimiento que esta federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado.*

*Señalado lo anterior y con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.*

***5. Como es que el titular del órgano interno de control, garantizo el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la preste n a cualquiera, que dejo en garantía.***

*En atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 16, 23, fracción IX, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 53, fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; Me permito hacer de su conocimiento que la transparencia sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo; el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, estableciendo a la letra lo siguiente: “…Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no es competente para atender su solicitud de información pública en el entendido de que tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; hago de su conocimiento que esta federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado.*

*Señalado lo anterior y con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.*

***6. Que se explique si a caso no se configura un conflicto de interes ya que es el Titular del órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar. Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica***

*A través de este medio se hace del conocimiento que en relación a lo referido, esta información no puede ser atendida por ésta vía, ya que se deriva de un juicio de valor y por lo tanto no es considerado como un derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece a la letra lo siguiente: “…Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce; por lo que esta federación, únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado. ” (Sic)*

Ante la respuesta emitida, el particular interpuso el presente recurso de revisión manifestando como razones o motivos de inconformidad que:

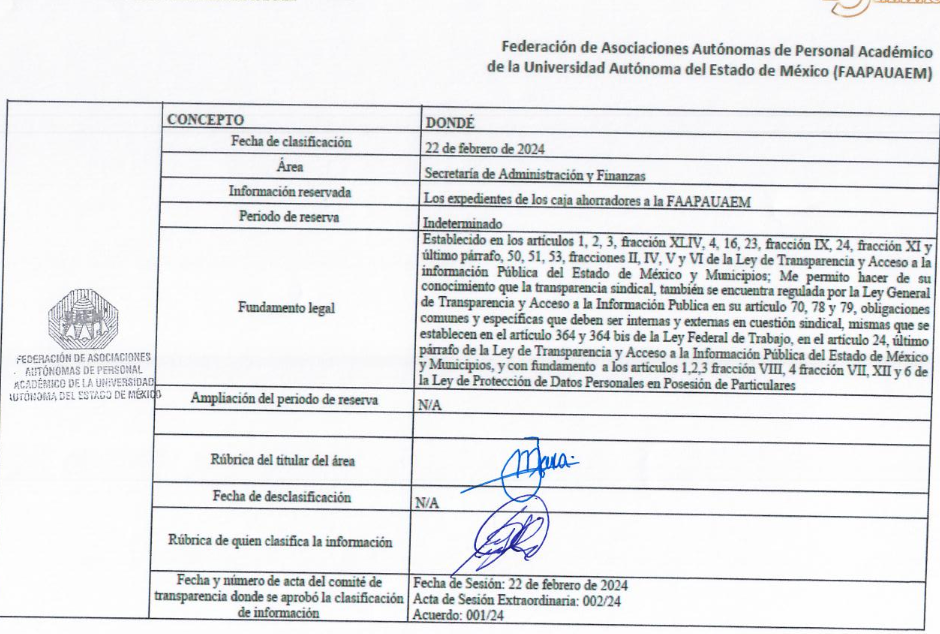
“*En términos de los artículos 176, 178, 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vengo a interponer mi garantía secundaría en contra de la supuesta respuesta de la Federación de Asociaciones Autónoma del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, bajo el tenor de los siguientes argumentos. 1 Es falso que no me pueden proporcionar en versión pública el padrón de beneficiarios si la misma ley refiere en su artículo 102 fracción III refiere que deben proporcionar el “padrón de socios, afiliados o análogos” razón por la cual se solicitó desde un principio se me proporcionará la información en versión pública, protegiendo los datos personales de cada uno de los que conforman el padrón de socios, afiliados o análogos asimismo dicho artículo refiere que solamente podrá ser clasificada como confidencial los domicilios de los socios, afiliados o análogos. 2* ***Es falso que no me pueden proporcionar en versión pública el listado completo de los que realizan aportaciones sindicales a dicha Federación****, si la misma ley refiere en su artículo 102 fracción IV refiere que deben proporcionar la relación de los recursos públicos económicos, en especie viene o donativos y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos.”, por lo que si bien es cierto dichas aportaciones las hacen los trabajadores de la Universidad, estas aportaciones se hacen del sueldo que perciben los trabajadores, es decir son recursos públicos y se debe manifestar que qué y para qué se usa dicho recurso. 3 4 Si bien es cierto que los sujetos obligados solo proporcionan la información que se genera posee o administre, según su propia respuesta, solicito la expresión documental, en términos del criterio 16/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de todo lo relacionado con el préstamo que se realizó al C. XXXXX XXXX XXXX sin cumplir con el requisito de ser docente. 5 Se sospecha que la FAAPA oculta información toda vez que la solicitud es muy clara,* ***solicito todo los documentos relacionados con el préstamo tan exuberante que recibió el C. XXXXX XXXXXX XXXXX, información que obra en sus archivos y que pretende evadir la solicitud, la cual es muy clara****. 6 Se sospecha que la FAAPA oculta información toda vez que la solicitud es muy clara, ya que* ***se solicitó justificar el préstamo realizado al C. XXXXXX XXXX XXXXX, esto debe entenderse como, demostrar, manifestar obviamente bajo documentales cuáles fueron las razones para otorgar dicho recurso****. Por lo anterior y en términos del artículo 13 de la ley de la materia, solicito de al INFOEM, la suplencia de la queja y ordene la entrega de la información que se solicitó en la solicitud de mérito*”. (Sic)

Se debe resaltar que el Sujeto Obligado rindió su Informe Justificado mediante la presentación de diversos documentos que consisten en lo siguiente:

* **“acta y acuerdo del rr 00730.pdf”**: Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, que contiene el Acuerdo 001/24 por el que se confirma la clasificación como reservada la información referente a la caja de ahorro y cuotas sindicales con fundamento en los artículos 113 fracción XII de la Ley General, 140 fracción IX de la Ley Estatal y numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
* “**oficio e informe justificado.pdf**”: Oficio número 002/24, a través del cual, el Titular de la Unidad de Transparencia informa a este Instituto que, hace llegar el informe justificado correspondiente al Recurso de Revisión número **00730/INFOEM/IP/RR/2024,** en el que medularmente ratifica la respuesta proporcionada, solicitando se confirme la respuesta proporcionada.
* “**recurso de revisión.pdf**”: Acuse del Recurso de Revisión de mérito.
* “**solicitud y respuesta 00012-2023.pdf**”: Acuse de la solicitud de información pública que se estudia, así como el archivo electrónico entregado mediante respuesta.
* “**padron-afiliados.pdf**”: Contiene un listado que corresponde al padrón de afiliados de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), con los rubros correspondientes a nombre, paterno y materno, como se advierte enseguida:



* “**cuadros de clasificacion.pdf**” Contiene dos cuadros de clasificación con los que se aprobó la reserva de información correspondiente a las Cuotas Sindicales y los expedientes de la caja ahorradores a la FAAPAUAEM por un periodo indeterminado, como se puede apreciar de la imagen siguiente:



Bajo las premisas anteriores, se concluye que en la especie será motivo de análisis si efectivamente, la respuesta otorgada por parte del **Sujeto Obligado** satisface los requisitos establecidos por la Ley de la materia.

Señalado lo anterior, es de precisar que se obvia el análisis de la competencia por parte del Sujeto Obligado, para generar, administrar o poseer la información solicitada, dado que éste ha asumido la misma, mediante los documentos remitidos en respuesta a la solicitud de información.

En efecto, el hecho de que el Sujeto Obligado haya asumido la información implica que la genera, posee o administra, en ejercicio de sus funciones de derecho público, es decir, no niega la existencia de la información solicitada, por el contrario, se pronuncia respecto de la información requerida, es por ello por lo que se reitera, se asume que posee la información; por lo tanto, el estudio en específico se obvia dado que a nada práctico llevaría el alcance del mismo.

En ese sentido, es de advertirse lo siguiente, nuestra Carta Magna dispone que para el ejercicio del derecho de acceso a la información los Estados deben observar diversos principios y bases, entre los cuales se establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo, órganos autónomos, así como de cualquier sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, ello se aprecia en el Artículo 6, apartado A, numeral I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece:

*“****Artículo 6***

*…*

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 3, fracción XI y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales son del tenor literal siguiente:

***“Artículo 3.-*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI.******Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,*** *en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones****.”*

[Énfasis añadido]

De la interpretación a los preceptos citados, se desprende que es información pública la contenida en los documentos que los Sujetos Obligados generen, administren o se encuentre en su posesión en el ejercicio de sus atribuciones y que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona.

Por otro lado, no debe soslayarse el hecho de que **el Recurrente** no impugnó el total del contenido de la respuesta dada por el Sujeto Obligado, ello en virtud de que señaló expresamente la negativa de proporcionar la información relacionada al padrón de socios o afiliados, el listado completo de los que realizan aportaciones sindicales a dicha Federación, así como lo relacionado al préstamo que recibió el C. XXXXXXX XXXX XXXXXXX, al manifestar textualmente lo siguiente: *“****deben proporcionar el “padrón de socios, afiliados o análogos”****…”, “2 Es falso que no me pueden proporcionar en versión pública* ***el listado completo de los que realizan aportaciones sindicales a dicha Federación****” y “…****se solicitó justificar el préstamo realizado al C. XXXXXX XXXX XXXXXX, esto debe entenderse como, demostrar, manifestar obviamente bajo documentales cuáles fueron las razones para otorgar dicho recurso****…” (sic)*

En este tenor, se estima que **el Recurrente** está conforme con los documentos que le fueron entregados referentes al documento en donde consten los **requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación**; por lo que el motivo de su inconformidad radica en que no se entregó la información relacionada al padrón de socios o afiliados, el listado completo de los que realizan aportaciones sindicales a dicha Federación, así como lo relacionado al préstamo que recibió el C. XXXXXXX XXXX XXXXXXX, por lo que puede colegirse que la respuesta fue parcialmente consentida.

Lo anterior es así debido a que cuando el solicitante no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros de la respuesta que pudieran ser un agravio a su derecho, los mismos deben estimarse atendidos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES****. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.*

Así, la parte de la solicitud sobre la que no se expresó inconformidad, debe declararse consentida por el hoy Recurrente, ya que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar la parte de la respuesta con relación a la parte de la solicitud que no fue motivo de disenso ya que se infiere un consentimiento del Recurrente ante la falta de impugnación eficaz. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.*

Así, una vez establecido que el motivo de inconformidad del Recurrente es la negativa de proporcionar la información faltante antes referida, se infiere que la *litis* radica en establecer si el Sujeto Obligado entregó los documentos en donde conste, lo siguiente:

1. *Listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación.*
2. *Listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación.*
3. *Cómo es posible que se le haya realizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin ser maestro de la Universidad.*
4. *Como es que el Titular del Órgano Interno de Control, garantizó el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la preste n a cualquiera, que dejo en garantía.*
5. *Que se explique si acaso no se configura un conflicto de interés ya que es el Titular del Órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar.*
6. *Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica.*

En ese tenor, es importante precisar que, de la solicitud de información, así como la respuesta proporcionada a la misma y la información remitida mediante informe justificado, se desprenden diversos documentos, por lo que, con el fin de facilitar el estudio, es necesario realizar un cuadro comparativo, para mejor proveer respecto de lo peticionado y lo entregado, el cual se vislumbra en los términos siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Solicitud** | **Respuesta** | **Colma** |
| *1. Listado completo en versión pública del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación.* | Manifestó que esa Organización Sindical, no puede informar lo requerido; toda vez que de darse a conocer lo solicitado, se estarían violentando datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios  Mediante informe justificado remitió el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, que contiene el Acuerdo 001/24 por el que se confirma la clasificación como **reservada** la información referente a la caja de ahorro y cuotas sindicales. | **No**  **(***No se fundó ni motivo la clasificación como confidencial de dicho dato***)** |
| *2. Listado completo en versión pública de los que realizan aportaciones sindicales a la Federación.* | Informó que las aportaciones sindicales provienen de particulares (nuestros agremiados), por tal motivo son aportaciones privadas, no provienen de recursos públicos; sin embargo y de acuerdo al artículo 102 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene como propósito proporcionar el **padrón de socios** motivo por el cual entregó la liga para su consulta.  Asimismo, mediante informe justificado remitió un listado que corresponde al padrón de afiliados de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), con los rubros correspondientes a nombre, paterno y materno. | **Si** |
| *3.- Requisitos para adherirse a la caja de ahorros de la Federación.* | Comunicó que los requisitos los encuentra en el Capítulo III, Artículo 13 del Reglamento de Caja de Ahorro. La transparencia Sindical, también se encuentra regulada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 70, 78 y 79, obligaciones comunes y específicas que deben ser internas y externas en cuestión sindical, mismas que se establecen en el artículo 364 y 364 bis de la Ley Federal de Trabajo, así como en los artículos 92, 99 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios | **✓**  **(**Actos consentidos**)** |
| *4. Cómo es posible que se le haya realizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin ser maestro de la Universidad.* | Manifestó que esa federación únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado.  Además, refirió que en relación a lo referido, la solicitud no puede ser atendida por ésta vía, ya que se de**riva de un juicio de valor y por lo tanto no es considerado como un derecho de acceso a la información pública**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. | **Parcialmente** |
| *5. Como es que el Titular del Órgano Interno de Control, garantizó el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante y no creo que dicha cantidad se la presten a cualquiera, que dejo en garantía.* | **Parcialmente** |
| *6. Que se explique si acaso no se configura un conflicto de interés ya que es el Titular del Órgano Interno de Control y pide préstamos a la misma entidad a la que él puede fiscalizar.* | **Parcialmente** |
| *7.* *Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,, dónde queda la ética y buen comportamiento que según él predica.* | **Parcialmente** |

Del cuadro anterior, podemos concluir que se tiene por atendido el punto identificado con el numeral **3** de la solicitud de información, una vez que el solicitante no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de la respuesta otorgada que pudiera ser un agravio a su derecho de acceso a la información.

Por otra parte, podemos concluir se colmó mediante respuesta e informe justificado el puntos **2** de la solicitud de información por parte del **Sujeto Obligado**, ello al remitir en primera instancia la liga de consulta, así como mediante informe justificado el documento en donde conste el listado del padrón de afiliados de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), en donde se advierte el nombre completo de sus afiliados.

En ese sentido, es evidente que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, empero, en los términos que establezca la normatividad aplicable, conminando a los sujetos obligado a sólo proporcionar la información que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre, sin que se comprenda el procesamiento de la misma, el presentarla conforme al interés del solicitante, ni generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.

Aunado a lo antes expuesto, la respuesta emitida por **El Sujeto Obligado** tiene la presunción legal de ser verídica, considerado que fue emitida por un servidor público en ejercicio de sus funciones, lo que conlleva la presunción de veracidad de todo acto administrativo.

Adicionalmente, es de destacar que este Órgano Garante no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de lo afirmado por parte del **Sujeto Obligado** pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que lo faculte para ello.

Lo anterior se robustece con lo plasmado en el criterio 31-10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (INAI), que lleva por rubro y texto los siguientes:

***El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados****. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. Expedientes: 2440/07 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazábal 0113/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – Alonso Lujambio Irazábal 1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - María Marván Laborde 2395/09 Secretaría de Economía - María Marván Laborde 0837/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. – María Marván Laborde*

*Criterio 31/10*

En esa tesitura, de acuerdo a lo inmerso en el expediente que nos ocupa se advierte que El Sujeto Obligado ha colmado las pretensiones del particular formuladas en el punto **2** de la solicitud de información, remitiendo los documentos en donde consta la información requerida.

Asimismo, referente a los puntos **4. 5, 6 y 7** de la solicitud de información, correspondientes a “*Cómo es posible que se le haya realizado un préstamo tan exuberante de 2´000,000.00 al Titular del Órgano Interno de Control...*”, “*Como es que el Titular del Órgano Interno de Control, garantizó el pago de las mensualidades de dicho prestamos, ya que es una cantidad exuberante*”, “*Que se explique si acaso no se configura un conflicto de interés ya que es el Titular del Órgano Interno de Control y pide préstamos*” y “*Ojalá que el titular del órgano interno de control y la federación de asociaciones autónomas ambas de la universidad, pueda justificar, el préstamo tan grande de 2´000,000.00,*”, debemos destacar que, si bien es cierto, en dichos señalamientos, se observa en primer lugar que los requerimientos de información se formularon a través de planteamientos en donde no se identifica un documento en específico, en segundo lugar, se aprecia que en la misma se vierten manifestaciones subjetivas que no pueden ser atendidas mediante el Derecho de Acceso a la Información; sin embargo, también es cierto que, cuando los particulares no identifican de forma precisa los documentos requeridos bastará con que se remita cualquiera que refleje la información requerida. Al respecto cobra relevancia el criterio emitido por el Órgano Garante Nacional con número **16/17** cuyo rubro y texto disponen a la literalidad lo siguiente:

***“EXPRESIÓN DOCUMENTAL.***

*Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.*

***Precedentes:***

* *Acceso a la información pública. RRA 0774/16. Sesión del 31 de agosto de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Salud. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.*
* *Acceso a la información pública. RRA 0143/17. Sesión del 22 de febrero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*
* *Acceso a la información pública. RRA 0540/17. Sesión del 08 de marzo del 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Economía. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. “* ***(Sic)***

En ese orden de ideas, el documento que puede colmar los requerimientos formulados por el Recurrente, es el expediente formado con motivo del préstamo realizado por la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México(FAAPAUAEM), al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud de información de mérito.

Acotado lo anterior, es pertinente traer a contexto lo establecido en el Estatuto Sindicato Gremial de Personal Académico, denominado Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) que a la letra señala lo siguiente:

*“****Artículo 1°*** *Se constituye un* *Sindicato Gremial de Personal Académico, denominado Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) de conformidad al acuerdo que consta en el acta constitutiva de fecha nueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve.*

***Artículo 2°*** *La FAAPAUAEM se conforma por los miembros del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que libremente deseen afiliarse, a través de las Asociaciones Autónomas, en los términos de la Ley Federal del Trabajo y la Legislación Universitaria aplicable.*

***Artículo 3°*** *La FAAPAUAEM es reconocida como Sindicato de Personal Académico de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 353-Ñ fracción I.”*

***Artículo 7° De los principios****:*

*1. Representar ante las autoridades universitarias y laborales a todo el Personal Académico afiliado sobre sus asuntos laborales y académicos, manteniendo siempre una disposición abierta y franca de diálogo y negociación.*

*2. Defender, ante las autoridades respectivas y mediante los valores éticos y profesionales en que fueron formados todos los universitarios, el derecho a la representación gremial del Personal Académico como el medio institucional que permite la movilización, la solidaridad y la negociación legítima frente a las eventualidades que atenten contra sus intereses: laborales, académicos y jurídicos.*

*3. Preservar y promover los valores que definen a la Universidad Pública, a su Autonomía y al Sindicalismo Universitario.*

*4. Participar activamente dentro del Sindicalismo Estatal, Nacional e Internacional, a efecto de fortalecer y preservar el derecho a la representación y movilización sindical del Personal Académico.*

*5. Ejercer el derecho de huelga consagrado en la Ley Federal del Trabajo, como medio de defensa de los derechos sindicales. 6. Impulsar planes y programas en la UAEM que reconozcan y estimulen la productividad, desarrollo y profesionalización del Personal Académico, que se traduzcan en mejores condiciones laborales.*

***DE LA CALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FAAPAUAEM***

***Artículo 9°*** *Los miembros de la FAAPAUAEM podrán tener las calidades siguientes:*

*1. Activos. Son aquellos integrantes del personal académico afiliados que están en pleno ejercicio de sus derechos y aportan quincenalmente sus cuotas sindicales.*

*2. No activos. Son aquellos integrantes del personal académico afiliados que se encuentran con permiso sin goce de sueldo o desempeñan un puesto de confianza en términos del Contrato Colectivo de Trabajo, así como los que interrumpen sus relaciones laborales como maestros de asignatura y por esta situación se suspende la aportación de su cuota sindical.*

***Artículo 38°*** *Las* *Comisiones del Consejo Directivo están conformadas por integrantes del mismo, siendo presidente ex-oficio de las mismas el Secretario General; pueden ser permanentes o transitorias. Son permanentes las siguientes:*

1. *Comisión de Caja de Ahorros, cuya función es vigilar la gestión eficiente y financieramente viable de la caja ahorradores.*

*(…)*

*Artículo 48° Funciones de las Secretarías:*

*(…)*

***C)*** ***Secretaría de Administración y Finanzas****:*

*1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la FAAPAUAEM.*

*2****. Administrar la caja de ahorro.***

Sirve a manera de robustecer lo antes señalado, el contenido del Reglamento de Caja de Ahorro Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), que establece lo que a continuación se transcribe:

*“****PRESENTACIÓN***

*La Federación de Asociaciones Autónoma de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, en cumplimiento a sus fines colaterales y por acuerdo unánime del Consejo Directivo, fundó la Caja de Ahorro en 1982, con el objetivo de fomentar el ahorro de sus afiliados.*

*(…)*

***Artículo 3.*** *La FAAPAUAEM, en cumplimiento de sus fines colaterales por acuerdo unánime de su Consejo Directivo, ha tenido a bien constituir una Caja de Ahorro para el personal académico que labora en la UAEM y decida integrarse a ella voluntariamente, siempre y cuando su cheque y forma de pago sea por nómina general.”*

*(…)*

***Artículo 7. Los objetivos de la Caja de Ahorro son****:*

*A) Fomentar el ahorro entre el personal académico que labora en la UAEM mediante aportaciones quincenales.*

*B)* ***Otorgar préstamos única y exclusivamente a sus integrantes, de acuerdo con los términos que se expresan en el presente Reglamento.***

*C) Promover beneficios a sus integrantes a través de convenios, promociones y/o planes de financiamiento que apoyen su economía, previo cumplimiento de los requisitos para cada caso.*

*D) Otros actos o contratos que, directa o indirectamente, sean medios de consecución de cualquiera de los objetivos antes mencionados*

***Artículo 8.*** *Los integrantes de la Caja de Ahorro son aquéllos que en forma voluntaria* *están aportando quincenalmente una cantidad monetaria, determinada en la solicitud de afiliación o de ingreso a la Caja de Ahorro.*

*(…)*

***Artículo 12.*** *Para ingresar a la Caja de Ahorro se deben satisfacer los requisitos siguientes:*

*A) Acreditar la adscripción a la UAEM por medio de la presentación de una identificación personal vigente y el último talón de cheque respectivo, cualquiera que sea la categoría que ostenten y que cobren en la nómina general.*

*B) Presentar la solicitud de afiliación y autorización de descuento personalmente o a través del representante de su Asociación, en las oficinas de la Caja de Ahorro.*

***Artículo 14.*** *Los integrantes de la Caja de Ahorro tendrán los derechos siguientes:*

***(…****)*

*C) Modificar la cantidad de su aportación, incrementarla o disminuirla, llenando la solicitud para este efecto.*

*D) Suspender temporal o definitivamente su aportación a la Caja de Ahorro, llenando la solicitud respectiva.*

*E) Solicitar el retiro de sus aportaciones ahorradas con apego al calendario aprobado por el Consejo Directivo, el cual indica las fechas en que se recibirá.*

*F) Los préstamos personales nominales se les concederán a los afiliados hasta por un monto de tres veces su ahorro. En el supuesto de solicitar una cantidad mayor a este monto, deberán:*

*1. Acompañar una carta dirigida a la H. Comisión de Vigilancia de Caja de Ahorro de la FAAPAUAEM, exponiendo los motivos de su solicitud.*

*2. Que en su último talón de cheque se compruebe que tiene liquidez quincenal para cubrir el crédito solicitado.*

*3. Contar con un aval que esté afiliado a la Caja de Ahorro.*

*(…)*

***Artículo 51.*** *Los integrantes que tengan adeudos o sean avales en la Caja de Ahorro no podrán solicitar su baja, en tanto el deudor no cubra el monto total de la deuda que tiene pendiente.*

De los preceptos en cita, podemos advertir que, el Sujeto Obligado se encuentra constituido por un Sindicato Gremial de Personal Académico, denominado Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, mismo que está conformado por Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que libremente deseen afiliarse, a través de las Asociaciones Autónomas, en los términos de la Ley Federal del Trabajo y la Legislación Universitaria aplicable.

Dicha Federación de Asociaciones Autónomas, tiene como propósito el representar ante las autoridades universitarias y laborales a todo el Personal Académico afiliado sobre sus asuntos laborales y académicos, así como a las eventualidades que atenten contra sus intereses.

Una vez incorporados los servidores de la Universidad Autónoma del Estado de México al Sindicato, son denominados afiliados y pueden dividirse entre activos y no activos, los primeros corresponden a integrantes del personal académico afiliados que están en pleno ejercicio de sus derechos y aportan quincenalmente sus cuotas sindicales, mientras que los segundos, son aquellos integrantes del personal académico afiliados que se encuentran con permiso sin goce de sueldo o desempeñan un puesto de confianza en términos del Contrato Colectivo de Trabajo.

Continuando con el análisis de los preceptos en cita, se establece que dentro de las Comisiones del Consejo Directivo del Sujeto Obligado, se encuentra como permanente la Comisión de Caja de Ahorros, cuya función es vigilar la gestión eficiente y financieramente viable de la caja ahorradore, que es administrada por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Dicha caja de ahorro, se fundo en 1982 con el objetivo de fomentar el ahorro entre los afiliados del Sujeto Obligado, para el personal académico que labora en la UAEM y decida integrarse a ella voluntariamente, siempre y cuando su forma de pago sea por nómina general. Uno de lo objetivos de la Caja de Ahorro en referencia es el otorgar préstamos única y exclusivamente a los integrantes que se encuentran aportando quincenalmente una cantidad monetaria, determinada en la solicitud de afiliación o de ingreso a la Caja de Ahorro.

Señalando también que, dichos integrantes podrán modificar la cantidad de su aportación y solicitar el retiro del monto ahorrado, así como solicitar préstamos personales nominales se les concederán hasta por un monto de tres veces su ahorro; sin embargo, se podrá requerir una cantidad mayor a este monto acompañando la solicitud de una carta dirigida a la H. Comisión de Vigilancia de Caja de Ahorro de la FAAPAUAEM u con la condición de que en su último talón de cheque se compruebe que tiene liquidez quincenal para cubrir el crédito solicitado.

Ahora bien, de la consulta realizada al Padrón de Afiliados del Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México(FAAPAUAEM) de los años 2018, 2019 y 2020, se advierte que el servidor público referido en la solicitud de información, forma parte de los agremiados del Sujeto Obligado, y por lo tanto pudiera pertenecer a la caja de ahorro de la cual se le efectuó el préstamo, como se puede advertir de la imagen que se inserta a modo de ejemplo a continuación:

En ese sentido, no pasa desapercibido para este Instituto que la petición realizada por el **Recurrente** al momento de ingresar su solicitud de información y reiterada mediante sus manifestaciones durante la etapa de instrucción, en relación a la posibilidad de que se configure un conflicto de interés ya que, al servidor público que se le prestó la cantidad referida es el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de México y si bien es cierto fue requerido a Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, corresponden a los mismos servidores públicos que él puede fiscalizar en su calidad de socios, generando una posible afectación a los agremiados que participan en la caja de ahorro del Sujeto Obligado.

En este punto es evidente que se presenta una colisión de derechos, puesto que lo que el **Recurrente** solicita es considerado como información confidencial que no será de escrutinio, relacionada con aquella que refiera a datos propios del sindicato o de sus agremiados, cuya difusión pudiera afectar su libertad sindical y privacidad como persona jurídica de derecho social, así como de aquella que refiera a su administración y actividades, alegando que existe una vulneración al interés público en razón de que hay posibilidad de que se vulneren los derechos de los socios, afiliados o análogos del Sujeto Obligado que realizan aportaciones a la caja de ahorro referida; asimismo, la posible configuración de un conflicto de intereses.

Al respecto, conviene señalar los establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que en los artículos 1, 3 y 44 de dicho ordenamiento dispone lo siguiente:

***Artículo 1.*** *La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de México y tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.*

***Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:***

*(…)*

*V.* ***Conflicto de interés****: A la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.*

***SECCIÓN***

***CUARTA DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES***

***Artículo 44****. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar la declaración de situación patrimonial, en términos de la presente Ley.*

*Para tal efecto, la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control se encargarán que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y presentación de la constancia de declaración fiscal.*

***Artículo 45****.* ***Para efectos del artículo anterior habrá conflicto de interés en los supuestos establecidos en la fracción V del artículo 3 de la presente Ley****.*

*La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto con su función, la cual deberá contener por lo menos:*

*I.* ***Intereses personales del declarante que pudieran influir en el empleo, cargo o comisión****:*

*a) Datos del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos que laboren en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, o en órganos autónomos.*

*b) Familiares consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil, que laboren en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, o en órganos autónomos.*

*II. Participación económica o financiera del declarante, concubina, concubinario, familiares consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil y/o dependientes económicos a la fecha de conclusión.*

*a) Tipo de participación o contrato: porcentaje de participación en el capital, partes sociales, servicios profesionales, servicios profesionales o de bienes muebles o inmuebles.*

*b) Tipo de sociedad: mercantil, anónima o de responsabilidad límitada, organización civil, asociación civil, en direcciones y consejos de administración; participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras.*

*III. Participación del declarante, cónyuge, concubina, concubinario, familiares consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil y/o dependientes económicos en asociaciones, organizaciones y asociaciones civiles, consejos y consultorías a la fecha de inicio del cargo o conclusión de este.*

*a) Naturaleza del vínculo: socio o colaborador.*

*b) Frecuencia anual.*

*c) Tipo de persona jurídica colectiva: instituciones de derecho público, sociedades o asociaciones de derecho privado, fundación, asociación gremial, sindicato o federación de organizaciones de trabajadores, junta de vecinos u otra organización comunitaria, iglesia o entidad religiosa.*

*d****) Tipo de colaboración: cuotas, servicios profesionales, participación voluntaria, participación remunerada****.*

*e)* ***La participación presente o pasada del servidor público*** *y del cónyuge, dependientes económicos o familiares hasta en segundo grado, en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades,* ***préstamos, créditos y obligaciones financieras.***

*IV. Viajes del declarante, cónyuge, concubina, concubinario, familiares hasta en segundo grado y/o dependientes económicos del cónyuge, dependientes económicos o familiares hasta en segundo grado financiados por terceros, y*

*V. Donativos realizados y/o recibidos por el declarante, cónyuge, concubina, concubinario, familiares hasta en segundo grado y/o dependientes económicos, así como los que hubieran realizado a fundaciones u organizaciones no lucrativas de las que forma parte el declarante.*

De los preceptos en cita, podemos advertir que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios es de observancia general en el Estado de México y tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, asimismo, se establece que el conflicto de intereses se define como una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

De igual forma se establece que la declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto con su función, la cual deberá contener, entre otros datos, los intereses personales del declarante que pudieran influir en el empleo, cargo o comisión de familiares consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil, que laboren en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, o en Órganos Autónomos, **contemplando la participación del servidor público en direcciones y consejos de administración, préstamos, créditos y obligaciones financieras.**

De tal forma que Pleno de este Instituto estima que existen circunstancias en el caso en concreto que deben ponderarse con el propósito de dilucidar qué derecho debe prevalecer, ya sea el derecho a la protección de información confidencial, o bien el derecho al acceso a la información del Recurrente en aras de la máxima publicidad y un mayor interés público por la posible vulneración de los agremiados del Sujeto Obligado generada por la por posible configuración de un conflicto de intereses.

En esos términos, es necesario establecer que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley en la Materia, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el párrafo vigésimo segundo, fracción VIII del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que a la letra señala:

*Artículo 5.*

*[…]*

*VIII.* ***El Estado contará con un organismo autónomo****, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna****, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley****.*

***El organismo autónomo garante previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados****.*

Es así que este Órgano Garante se rige, principalmente, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Sin embargo, también está obligado a sujetarse a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la ley suprema en nuestro país, así como a los tratados internacionales que se hayan firmado en la Materia.

En ese tenor, debe tenerse en cuenta que el artículo sexto de nuestra Carta Magna estipula lo siguiente:

***Artículo 6o.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.* ***El derecho a la información será garantizado por el Estado****.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.*

***Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:***

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

1. ***Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral*** *o sindicato* ***que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito*** *federal, estatal y* ***municipal, es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por , razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.*** *Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*
2. ***La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***
3. *(…)*

Asimismo, es necesario dejar establecido que el primer y segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

***Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento****. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.*

***Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales****, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición,* ***en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos****, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o* ***para proteger los derechos de terceros.***

De la interpretación de los numerales citados, se tiene que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Por tanto, se puede colegir que la información que posee el Sujeto Obligado respecto del expediente formado con motivo de un préstamo solicitado por el **Recurrente** es pública; sin embargo, en el caso en concreto se debe señalar que el préstamo realizado al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud, al corresponder a la caja de ahorro de la Federación, no tiene el carácter de público ni es susceptible de entregarse al no involucrar el ejercicio de recursos públicos, por lo que, si bien su clasificación como información confidencial es posible en apego a lo señalado por las Leyes en la Materia, también es necesario ponderar si es mayor el **interés público** de conocer los términos que se aprobó el préstamo referido, atendiendo a la cantidad económica involucrada, que de ser el caso, pudiera no ser accesible a cualquier agremiado, y por lo tanto se evidencia una afectación a los terceros involucrados, mismos que realizan aportaciones a la multirreferida caja de ahorro.

Asimismo, el expediente formado con motivo del préstamo otorgado al Titular del Órgano Interno de Control, puede calificarse como información de interés público, entendiéndose ésta como aquella que resulta relevante o beneficiosa para los socios o agremiados de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), no simplemente de interés individual, pues en este caso, en primer término es importante para protección y beneficio de los propios ahorradores que realizan aportaciones periódicas a la caja de ahorro del Sujeto Obligado, misma que genera una responsabilidad de rendición de cuentas y por lo tanto, el acto debe ser considerado de escrutinio público, situación que sí es de interés público y general.

Aunado a ello, el hacer pública la in formación relacionada al préstamo otorgado al Titular del Órgano Interno de Control referido por el particular, deviene de una decisión, ejecución o ambas, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas y que se impongan de manera imperativa; por lo que, los sindicatos, si bien, en principio no están obligados a publicar este tipo de actos, también lo es, que alguno de sus agremiados pudiera sufrir alguna afectación con las decisiones tomadas en dicho órgano, que son considerados **actos de autoridad**, por lo que se volverá información susceptible a transparentarse, dado que su participación trasciende en la determinación tomada en dicho Sindicato.

Ahora bien, este Instituto se encuentra constreñido a actuar en apego a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable y bajo diversos principios, entre ellos los de **legalidad** y **objetividad**, entendiendo éstos como sigue:

**Legalidad.** Obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables.

**Objetividad.** Obligación del Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales.

Es importante establecer que, para verificar si es posible dar a conocer un dato considerado como confidencial, es necesario la realización de una prueba de interés público, tal como está estipulado en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, con número de registro 2016812, que a la letra dispone lo siguiente:

***DATOS PERSONALES. LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS AL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LAS PARTES EN LAS LISTAS DE LOS ASUNTOS VENTILADOS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO IMPLICA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NI PRECISA, POR ENDE, DE LA ANUENCIA DE AQUÉLLAS.***

***El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, entre otros aspectos relacionados con el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, que la relativa a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos que fijen las leyes; en tanto que la información en posesión de los sujetos obligados es pública****, y sólo podrá reservarse temporalmente en los casos previstos por la ley, entre los que destacan, la posible afectación del interés público, la seguridad nacional, los derechos del debido proceso o la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, así como cuando se ponga en riesgo la vida o la seguridad de una persona.* ***También se establece en dicho precepto constitucional que en la interpretación del derecho mencionado deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 104, 113, 116 y 120 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública procede restringir el acceso a la información en poder de los sujetos obligados, cuando se clasifique como*** *reservada o como* ***confidencial****. Así, puede considerarse reservada mediante la aplicación de la prueba de daño, si éstos demuestran que con su divulgación se actualizaría alguno de los supuestos legales en que se juzga preferible aplazar su acceso.* ***Tratándose de información confidencial****, los sujetos obligados* ***sólo pueden divulgarla o permitir a terceros acceder a ella*** *si cuentan con el consentimiento de los titulares, o bien, cuando* ***mediante la prueba de interés público, que tiene por objeto distinguir qué información sensible de los gobernados puede ser objeto de divulgación, se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público, y ponderando el nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el interés de la colectividad****. Por tanto, la publicación regular de las listas de los asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales, en las que se indica el nombre o denominación de las partes, y que tiene como objeto dar a conocer a los interesados que en el expediente de que se trata se emitió una resolución, no implica la divulgación de información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, porque no involucra aspectos relacionados con su vida privada, ni datos personales que ameriten un manejo diferenciado al general. Lo anterior, porque ese elemento se utiliza para identificar el promovente en un proceso judicial, lo cual, por sí solo, no afecta su honor en forma negativa ni genera descrédito a su imagen pública, y mientras no se demuestre que puede ocasionarle daño, no es razonable restringir ese empleo por los órganos jurisdiccionales, en observancia a los principios de transparencia y máxima publicidad.[[2]](#footnote-2)*

En ese sentido, para estar en posibilidades de desclasificar información considerada como confidencial, es necesario que se realice una prueba de interés público, en la que se distinga la información sensible de los gobernados que puede ser objeto de divulgación, en el presente caso, el expediente formados con motivo de del préstamo realizado por el Sujeto Obligado al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud de información de mérito, y se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público, y la ponderación del nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el interés de la colectividad.

Es así que, ante una colisión de derechos, el Pleno de este Instituto tiene la facultad de interpretar los ordenamientos aplicables con el propósito de resolver de manera armónica entre los derechos en conflicto, en el presente caso, entre el derecho a la información pública y el derecho a la protección de información susceptible de ser clasificada como confidencial, en concreto la relativa al expediente solicitado por el **Recurrente**. Lo anterior de acuerdo a los artículos 36 fracción de la Ley de Transparencia local; 82 fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos estatal; y artículo 9 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Por tanto, es necesario establecer puntualmente los aspectos a considerar, a fin de llevar a buen término el criterio que prevalecerá en el presente estudio, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado como ya ha quedado señalado. En ese orden de ideas, se puntualiza lo siguiente:

* Basándose en su derecho constitucional de acceso a la información**, la Recurrente** solicitó el expediente formado con motivo de del préstamo realizado por el Sujeto Obligado al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud, y al respecto conocer si existe un conflicto de intereses con motivo de la autorización del mismo.
* El Sujeto Obligado informó mediante respuesta, que no es competente para atender lo solicitado, en el entendido de que esa Organización Sindical tiene como propósito la consolidación gremial del personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y debido a su naturaleza jurídica y autonomía sindical que ejerce únicamente está obligada a transparentar e informar a la sociedad en general lo que expresamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios le impone respecto de los recursos públicos que recibe por parte del Estado.
* El Recurrente no concuerda con dicha aseveración debido a que considera que es un dato necesario para para verificar la posible configuración de un conflicto de intereses, dado a que el prestatario es el encargado de fiscalizar a los agremiados que conforman al prestamista, aunado a que se presumen que no se debió autorizar dicho préstamo.
* Este Instituto debe velar por la máxima publicidad de la información pública y el derecho del Recurrente para la obtención de la información solicitada.
* Por otra parte, este Instituto también está obligado a la protección de información susceptible de clasificarse como confidencial, en el caso en concreto, el expediente del préstamo referido que no involucra recursos públicos.
* Este Instituto está obligado a actuar conforme lo establecen las leyes vigentes aplicables.

Es así que, en concordancia con el artículo 184 de la Ley de Transparencia local, es menester para la resolución del conflicto entre derechos, el aplicar la prueba de interés público basándose en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, se establece lo siguiente:

**IDONEIDAD** (*la legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido*). El Pleno considera que en el presente caso la solicitud del Recurrente se refiere al objeto del expediente solicitado, no al padrón de ahorradores de la caja de ahorro del Sujeto Obligado, ni a las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados al mismo; es decir, requiere conocer la información del préstamo efectuado al Titular encargado de fiscalizar a la Universidad Autónoma del Estado de México, no a la información respecto de sus agremiados, con la finalidad de corroborar que el **Acto de Autoridad** efectuado no ocasione una vulneración, causando posibles daños y perjuicios a todos los socios, afiliados o análogos del Sindicato que forman parte de la caja de ahorro, en donde se ven involucradas sus aportaciones. Por lo que se estima que puede existir un interés público lo que es acorde con las excepciones constitucionales a la protección de información referente a la vida privada y datos personales. Así, en el presente asunto, el derecho de acceso a la información pública se adopta como preferente y este contempla un fin constitucionalmente válido que radica en privilegiar la máxima publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6º constitucional.

**NECESIDAD** (*la falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información para satisfacer el interés público*). En esta etapa es necesario analizar si existe alguna medida alternativa que también pueda resultar idónea que afecten en menor medida los derechos fundamentales en colisión. En el presente caso, no se considera que exista ninguna otra medida más conveniente que el test de proporcionalidad que se está aplicando, en razón de que los dos derechos en conflicto están tutelados por leyes generales y estatales que constriñen a este Instituto a proteger. Por este motivo, se estima que éste es el único medio al alcance de este Órgano Garante para publicar el expediente citados anteriormente; lo que permitirá que se lleve a cabo un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía a las actuaciones de la autoridad encargada de fiscalizar a los servidores públicos que conforman al Sindicato, así como evidenciar el procedimiento aprobado mediante Acto de autoridad del Sujeto Obligado que pudiera evidenciar un probable conflicto de intereses, lo que se traduce en evitar la incorrecta utilización de las aportaciones realizadas por los agremiados a la caja de ahorro, así como igualar las condiciones de los mismos, respecto de la cantidad económica a la que pueden acceder con motivo de dicha prestación.

**PROPORCIONALIDAD** (*el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población*). En el caso en concreto, como ya quedo señalado anteriormente, se considera que la solicitud de información es concerniente al objeto del expediente solicitados (prestamos de la caja de ahorro que está autorizado), lo cual es de interés público por la importancia que tiene para la sociedad el conocer que dicho procedimiento sea acorde con el que haya sido autorizado por la autoridad respetando los requisitos y formalidades establecidos en la normatividad aplicable con la finalidad de que no se causen daños o perjuicios a los socios o agremiados, así como a la población en general con motivo de la posible con figuración de un conflicto de intereses, por lo que la afectación a los terceros sería menor a la vulneración de toda una comunidad, puesto que únicamente se proporcionaría el expediente del pretamo otorgado al Titular del Órgano Interno de Control, pero se protegerían los demás datos personales que les son inherentes, lo que evitará hacer identificables a los demás socios o agremiados.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que no existen derechos absolutos y que estos encuentran sus limitantes y restricciones cuando se presentan otros derechos, fines o bienes constitucionales que también deben ser tutelados, para mayor abundamiento resulta aplicable la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con número de Registro 2003269, que a la letra señala lo siguiente:

***DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS.***

***La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas****, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances del objeto concretamente protegido por cada derecho fundamental, es decir, sirven para definir el contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es otra realidad carente de protección. Por otro lado,* ***es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo****.[[3]](#footnote-3)*

De tal forma que no es posible establecer que el derecho a la protección de los datos personales sea absoluto y en el caso en concreto, el perteneciente a el expediente formado con motivo del préstamo realizado por la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México(FAAPAUAEM), al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud de información. Así, se debe recordar que el derecho de acceso a la información es considerado como un derecho llave, que abre la posibilidad de acceder a otros derechos. Lo anterior quedó de manifiesto puesto que el máximo Tribunal de nuestro país ha dispuesto que el derecho de acceso a la información tiene una doble naturaleza, pues es un derecho tanto individual como social, según la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte con número de registro 169574, que a la letra establece lo siguiente:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.***

***El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos****. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado,* ***el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración****. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[[4]](#footnote-4)*

Por lo anterior, resulta evidente que el permitir el acceso al expediente formado con motivo del préstamo realizado al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud de información, otorga la posibilidad de que se ejerza un control institucional a las actuaciones de las autoridades en el sentido de que se puede verificar la correcta autorización del uso las aportaciones realizadas por los agremiados del Sindicato a la caja de ahorro, traduciéndose en un beneficio de terceros que la autoridad ha actuado en apego a la normatividad y no se causa ningún tipo de daño o perjuicio a la sociedad mediante los Actos de autoridad realizados por el Sujeto Obligado, así como la posible configuración de un conflicto de intereses como se desarrolló en párrafos que preceden.

Asimismo, es preciso hacer énfasis en el cargo del servidor público al que se le realizó el préstamo referido por el particular, ya que, al ser el Titular del Órgano Interno de Control, se le confieren diversas funciones, tales como prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos y gastos dentro de la administración de los servidores públicos del Sujeto Obligado, ello bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia y rendición de cuentas, ante ello, dicho servidor público esta constreñido a conducirse con imparcialidad.

Por lo anterior, es que se colige que el hacer entrega del expediente formado con motivo del préstamo realizado al Titular del Órgano Interno de Control, favorece a la rendición de cuentas del Sujeto Obligado, dada la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones del servidor público en referencia, en razón de intereses personales, familiares o de negocios, por lo que la publicidad de dichos documentos, corresponde evidentemente a un tema de interés público.

Por tanto, después de realizar la ponderación entre los derechos en colisión, el Pleno de este Instituto considera que, en este caso en particular, es preferible que el expediente formado con motivo del préstamo realizado por el Sujeto Obligado al Titular del Órgano Interno de Control se entregue en versión pública, pues esto implica un interés público mayor para la sociedad con respecto al menoscabo del derecho de protección de datos personales de los agremiados ahorradores, puesto que únicamente se dejara visible la información señalada y se protegerán los demás datos personales que estén contenidos en el expediente requerido.

En consecuencia, este Instituto estima que los motivos de inconformidad del Recurrente son fundados, siendo procedente ordenar la entrega del expediente formado con motivo del préstamo realizado por la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México(FAAPAUAEM), al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud de información de mérito, en versión pública acompañada del acuerdo que para tal efecto emita el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado.

Finalmente, en relación al requerimiento identificado con el numeral **1**, correspondiente a la entrega del listado completo del padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación, se destaca que el Sujeto Obligado remitió mediante informe justificado, el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, que contiene el Acuerdo 001/24 por el que se confirma la clasificación como reservada la información referente a la caja de ahorro y cuotas sindicales.; sin embargo, del análisis de dicho documento, se advierte que no se fundo ni motivo correctamente la clasificación de la información, ya que la misma corresponde a información susceptible de ser clasificadas como confidencial, como se desarrollara en párrafos subsecuentes.

Aclarado lo anterior, considerando el pronunciamiento del **Sujeto Obligado**, es importante destacar que conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Correlativo a ello, la Ley de Transparencia vigente en la entidad establece en su artículo 91, que el derecho humano de acceso a la información pública puede ser restringido excepcionalmente cuando se trate de información clasificada como reservada o confidencial.

En tal virtud, se tiene que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información a fin de obtener la información pública que obre en posesión de los sujetos obligados; no obstante, este no es un derecho ilimitado, es decir, su ejercicio conlleva restricciones; situación que se robustece con la siguiente tesis[[5]](#footnote-5):

***“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO****. Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.” (sic)*

En otras palabras, este Instituto resalta que, si bien, por regla general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, debemos considerar que también hay excepciones, es decir, que **se trate de información clasificada (confidencial o reservada)**, en cuyo caso, se restringirá, excepcionalmente, el acceso conforme a lo señalado en la ley en la materia; entendiendo a esta información, de conformidad con el artículo 3, fracciones XXI, XXIII y XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la siguiente manera:

* **Información confidencial**: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o **a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos**.
* **Información privada:** La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.
* **Información reservada:** La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley.

De lo antes señalado, se destaca que al reservar la información, en esencia, **implica el reconocimiento por parte de la autoridad de que lo solicitado sí tiene el carácter de público** **y sí es susceptible de entregarse**, es decir, de transparentarse; empero, advierte que existen causas presentes que impiden la publicidad de la información durante cierto periodo de tiempo; en otras palabras, hasta que dichas causas no concluyan, se podría causar algún daño con la apertura de la información.

De este modo, la información que se clasifica bajo la hipótesis de reserva, no pierde el carácter de pública, sino que se reserva temporalmente del conocimiento público, es decir, que por un tiempo determinado, se conservará y custodiará la información de manera especial, siendo que, transcurrido el plazo de reserva, el documento podrá divulgarse.

Por todo lo anterior, se destaca que la información requerida por el particular en el presente apartado, no actualiza los supuestos establecidos en la Ley de la materia como información reservada, ya que **la información referente al padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación, no tiene el carácter de público ni es susceptible de entregarse al no involucrar el ejercicio de recursos públicos**, por lo que actualiza los supuestos de clasificación clasificable como confidencial, en tal virtud, es que analizaremos la naturaleza de la información solicitada por el hoy **Recurrente**, con el fin de determinar la causal de clasificación como información confidencial.

En ese orden de ideas, también debemos considerar que no todos los Sujetos Obligados poseen un mismo grado de obligación para publicar y difundir la información que posean, generen y/o administren en el ejercicio de sus funciones; tal es el caso de los Sindicatos, que se trata de una organización conformada por los trabajadores de una institución o sector en particular cuyo último fin es el proteger sus derechos e intereses laborales.

Para este tipo de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, reconoce una serie limitada de obligaciones de transparencia específicas, mismas que pueden observarse dentro del artículo 102:

*“****Artículo 102. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible****, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable de la información de las obligaciones de transparencia a que se refiere el Capítulo II de este Título de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y* ***la siguiente****:*

***I.*** *Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;*

*II. El directorio del Comité Ejecutivo****;***

***III. El padrón de socios, afiliados o análogos****;*

***IV.*** *La relación detallada de los recursos púbicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan;*

***V.*** *Acta de la asamblea constitutiva;*

***VI.*** *Los estatutos debidamente autorizados;*

***VII.*** *El acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva; y*

***VIII.*** *Los contratos colectivos de trabajo de sus agremiados.*

*Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios, afiliados o análogos.*

*Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la plataforma electrónica. En todo momento el sindicato será responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.”*

(Énfasis añadido)

No es ocioso recordar que los Sindicatos, como tal, no desempeñan actividades en alguno de los tres órdenes de gobierno, por lo que, **no pueden, por definición realizar actos que puedan reputarse como públicos y oficiales**, al guardar la característica de ser privados; no obstante, en el caso de que hayan sido realizados o bien, la actividad haya sido cubierta **con recursos públicos, generan una responsabilidad de rendición de cuentas y por lo tanto, el acto debe ser considerado de escrutinio público, al involucrar ejercicio de recursos públicos, situación que sí es de interés público y general.**

Por otra parte, según Otero, Filiberto (2017), en la “Teoría General del Derecho de la Información y el nuevo modelo en México” (p. 37 y 38), precisó que el **acto de autoridad, es la acción u omisión unilateral, imperativa y coercible,** como consecuencia de una relación de supra-subordinación, susceptible de afectar la esfera jurídica de los administrados.

Así, el acto de autoridad, se entiende cualquier hecho negativo o positivo realizado por una institución pública, consistente en una decisión, ejecución o ambas, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas y que se impongan de manera imperativa; por lo que, los sindicatos, si bien, en principio no pueden realizar ese tipo de actos, también lo es, que alguno de sus agremiados puede participar en una Comisión Mixta y que **las decisiones tomadas en dicho órgano sean actos de autoridad,** por lo que se volverá información susceptible a transparentarse, dado que su participación trasciende en la determinación tomada en dicha comisión.

Así, se puede concluir que los documentos que den cuenta de **la recepción y ejercicio de recursos públicos, o bien, de la realización de actos de autoridad** en posesión de los sindicatos, **es pública**; en razón de ello, la información que tenga el Sujeto Obligado que contenga esta característica es susceptible de ordenarse su entrega y difusión a la ciudadanía; sin embargo, aquélla que **obre en poder de dicha organización, la cual provenga de recursos privados y se destine a la vida interna de la misma,** no está sujeta al escrutinio público en términos de la Ley de Transparencia, al no existir interés público de acceder a la misma, ya que no tiene una afectación fuera de sus agremiados.

Lo anterior encuentra sustento con base en el Convenio Internacional del Trabajo Número 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, que en sus artículos 3° y 8°, establece lo siguiente:

*“****Artículo 3***

***1.*** *Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.*

*2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. (…)”*

*“****Artículo 8***

***1.*** *Al ejercer los derechos que se le reconocer en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.*

***2.*** *La legislación nacional no menoscabará, ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio. (…)”*

Los preceptos transcritos *supra* contienen la obligación de las autoridades públicas de abstenerse de realizar alguna intervención, que limite o entorpezca el ejercicio de su asociación sindical; luego entonces, podemos concluir que la legislación nacional no podrá menoscabar las garantías previstas por el Convenio.

Aunado a lo anterior, conviene traer a estudio la Jurisprudencia número PC.I.A. J/2 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro 21, Tomo II, en agosto de dos mil quince, que establece lo siguiente:

***INFORMACIÓN PÚBLICA. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS RELATIVA A LOS RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES CONTRACTUALES A FAVOR DE SUS TRABAJADORES.***

*“****Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios*** *(Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex- Petroquímica****), constituyen entidades que, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, están obligadas a proporcionar a los terceros que lo soliciten aquella información que sea pública y de interés general, como es la relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos****, pues implica la ejecución del presupuesto que les haya sido asignado, respecto del cual, el Director General de ese organismo descentralizado debe rendir cuentas,* ***así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de aquéllos; así, los recursos públicos que esos entes entregan al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por concepto de prestaciones laborales contractuales a favor de sus trabajadores, constituyen información pública que puede darse a conocer a los terceros que la soliciten****, habida cuenta de que se encuentra directamente vinculada con el patrimonio de los trabajadores aludidos, relativa al pago de prestaciones de índole laboral con recursos públicos presupuestados, respecto de los cuales existe la obligación de rendir cuentas,* ***y no se refiere a datos propios del sindicato o de sus agremiados cuya difusión pudiera afectar su libertad y privacidad como persona jurídica de derecho social, en la medida en que no se refiere a su administración y actividades, o a las cuotas que sus trabajadores afiliados le aportan para el logro de los intereses gremiales****.”*

(Énfasis añadido)

De lo anterior se colige que la información de un sindicato, que se encuentra sujeta a rendición de cuentas, es aquélla que dé cuenta del ejercicio y uso de recursos públicos presupuestados y, por lo tanto, **no será de escrutinio, aquella que refiera a datos propios del sindicato o de sus agremiados, cuya difusión pudiera afectar su libertad sindical y privacidad, como persona jurídica de derecho social, así como de aquella que refiera a su administración y actividades.**

En conclusión, y una vez demostrado que el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios no establece la obligación de publicitar la comprobación de sus gastos ejercidos con recursos privados, este Organismo Garante concluye que la información solicitada referente al padrón de ahorradores de la caja de ahorro de la Federación y sus cuotas sindicales no se relaciona con el ejercicio de recursos públicos entregados al **Sujeto Obligad**o.

En ese mismo orden de ideas, se trae a colación el criterio 09/17 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el cual se cita a continuación para pronta referencia:

*“****Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público.*** *La información relativa a las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio público mandatado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que las mismas provienen de recursos privados que aportan los trabajadores afiliados.*

***Precedentes:***

*• Acceso a la información pública. RRA 4169/16. Sesión del 22 de febrero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.*

*• Acceso a la información pública. RRA 0089/17. Sesión del 22 de febrero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.*

*• Acceso a la información pública. RRA 0304/17. Sesión del 01 de marzo de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.”*

En primer lugar, resulta necesario señalar como punto de partida, el concepto de cuotas sindicales, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[[6]](#footnote-6), que dispone:

* **Cuota sindical:** Cantidad que abona el trabajador a su sindicato por razón de su afiliación.

Cuotas sindicales que se encuentran previstas en la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se cita para pronta referencia, a continuación:

*“****Artículo 110.-*** *Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes:*

*…*

***VI.*** *Pago de las* ***cuotas sindicales ordinarias*** *previstas en los estatutos de los sindicatos.*

*El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla;*

*…”*

Precepto legal con el cual logra acreditarse que, las cuotas sindicales forman parte de las deducciones de ley, que le son aplicadas por los patrones (caso particular Dependencia Pública) a los servidores públicos que forman parte de los agremiados de un Sindicato. Información que, al ya devenir de recurso que ya le fue proporcionado (pagado) al servidor público, se considera de carácter confidencial, por formar parte de su esfera patrimonial.

En ese orden de ideas, resulta necesario traer a contexto la naturaleza jurídica de las Asociaciones Sindicales, por lo que se cita a continuación el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen:

*“****Sindicatos, federaciones y confederaciones***

***Artículo 356.-*** *Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.”*

Precepto legal con el cual podemos concluir que, los sindicatos son integrados por trabajadores o patrones, para mejoramiento y defensa de sus derechos, es decir que, constituyen una persona jurídica colectiva que no depende estructural u operativamente de una dependencia pública para su funcionamiento.

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que la información solicitada indudablemente obra en los archivos del **Sujeto Obligado**;sin embargo, la misma no corresponde a información que deba publicarse, aunado que no se proporcionó el Acuerdo de Clasificación de la información como **CONFIDENCIAL**, inobservando lo dispuesto en los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI, XXXII y XLV; 6, 49 fracción VIII, 91, 137, 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente que a continuación se insertan:

***“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:***

*(…)*

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

*(…)*

***XX. Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

*(…)*

***XXXII. Protección de Datos Personales:*** *Derecho humano que tutela la privacidad de datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares;*

*(…)*

***XLV. Versión pública****: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 6.*** *Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los sujetos obligados no deberán proporcionar o hacer pública la información que contenga, con excepción de aquellos casos en que deban hacerlo en observancia de las disposiciones aplicables. En el caso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; los principios, procedimientos, medidas de seguridad en el tratamiento y demás disposiciones en materia de datos personales, se deberá estar a lo dispuesto en las leyes de la materia.*

***Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

*(…)*

***VIII****. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

*(…)*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

*(…)*

***Artículo 137****. Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.*

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable...”(Sic)*

De los preceptos anteriores se desprende que cuando un documento que contenga tanto información de interés público como información privada debe ser clasificada, y se hará la entrega del mismo, testando las secciones o datos que deban ser clasificados; por ende el Sujeto Obligado deberá proceder a testar los datos personales que se encuentre contenidos en los documentos por parte del Sujeto Obligado para satisfacer el derecho de acceso a la información pública del Recurrente, esto es, los datos concernientes a una persona identificada o identificable, o aquellos datos que tengan el carácter de sensibles, es decir los que afectan la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleven un riesgo grave para aquel de acuerdo a los que señala la fracción XII, del artículo 4, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujeto Obligados del Estado de México.

Datos que deberá clasificar como confidenciales por tratarse precisamente de información privada, puesto que los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables y los Sujetos Obligados no deberán hacer entrega de los mismos a personas ajenas a su titular.

Es de señalar que la clasificación de la información no opera con la simple supresión de datos que se haga en los documentos de que se trate o con la simple decisión que tome el Servidor Público Habilitado o el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, sino que ello deberá realizarse en términos de lo que disponen los artículos 49 fracción VIII, 53, fracción X y 59, fracción V, de la Ley en consulta, cuyo sentido literal es el siguiente:

***“Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***(…)***

***VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información****…”*

*(…)*

*“****Artículo 53.*** *Las* ***Unidades de Transparencia*** *tendrán las siguientes* ***funciones****:*

*(…)*

***X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;***

*(…)”*

***“Artículo 59.*** *Los* ***servidores públicos habilitados*** *tendrán las* ***funciones*** *siguientes:*

***(…)***

***V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información****, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta;*

*(…)”*

*Énfasis añadido.*

Denotándose de dichos ordenamientos jurídicos que el determinar la clasificación de la información es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego ésta presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

Para lo cual a su vez en el caso de información de carácter confidencial se debe atender a lo que señala el artículo 149, de la Ley de Transparencia Local vigente, cuyo contenido es de la literalidad siguiente:

*“****Artículo 149.*** *El* ***acuerdo que clasifique la información como confidencial*** *deberá contener un razonamiento lógico en el que demuestre que la información se encuentra en alguna o algunas de las hipótesis previstas en la presente Ley.”*

Es decir, el Sujeto Obligado a través de su Comité de Transparencia, deberá elaborar acuerdo que contenga un razonamiento lógico con el que se demuestre que la información que se clasifica como confidencial, encuadra en alguna de las hipótesis que contempla la Ley de la Materia en su artículo 143; ya que de lo contrario se estaría violentando el derecho de acceso a la información de la solicitante.

Asimismo, se destaca que el acuerdo de clasificación que elabore el Sujeto Obligado debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley; es decir, resulta necesario que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado emita el Acuerdo de Clasificación correspondiente debidamente fundado y motivado, el cual deberá cumplir cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ya expuesto; así como con los numerales aplicables de los **LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS**, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, mediante Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que literalmente expresan:

***Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas***

*“****Segundo.-*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica,* ***fundando y motivando la*** *reserva o* ***confidencialidad****, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total*** *o parcial,* ***el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.***

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto.*** *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos.*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público.*

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

*Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.*

*Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.*

*[…]*

***CAPÍTULO VIII***

***DE LA LEYENDA DE CLASIFICACIÓN***

***Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo*** *para señalar la clasificación de documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.*

*[…]*

***Quincuagésimo tercero. El formato para señalar la clasificación parcial de un documento****, es el siguiente:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Concepto*** | ***Dónde:*** |
| ***Sello oficial o logotipo del sujeto obligado*** | *Fecha de clasificación* | *Se anotará la fecha en la que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación del documento, en su caso.* |
| *Área* | *Se señalará el nombre del área del cual es titular quien clasifica.* |
| *Información reservada* | *Se indicarán, en su caso, las partes o páginas del documento que se clasifican como reservadas. Si el documento fuera reservado en su totalidad, se anotarán todas las páginas que lo conforman. Si el documento no contiene información reservada, se tachará este apartado.* |
| *Periodo de reserva* | *Se anotará el número de años o meses por los que se mantendrá el documento o las partes del mismo como reservado.* |
| *Fundamento legal* | *Se señalará el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la reserva.* |
| *Ampliación del periodo de reserva* | *En caso de haber solicitado la ampliación del periodo de reserva originalmente establecido, se deberá anotar el número de años o meses por los que se amplía la reserva.* |
| *Confidencial* | *Se indicarán, en su caso, las partes o páginas del documento que se clasifica como confidencial.* ***Si el documento fuera confidencial en su totalidad, se anotarán todas las páginas que lo conforman****. Si el documento no contiene información confidencial, se tachará este apartado.* |
| *Fundamento legal* | *Se señalará el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la confidencialidad.* |
| *Rúbrica del titular del área* | *Rúbrica autógrafa de quien clasifica.* |
| *Fecha de desclasificación* | *Se anotará la fecha en que se desclasifica el documento.* |
| *Rúbrica y cargo del servidor público* | *Rúbrica autógrafa de quien desclasifica.* |

Efectivamente, cuando se clasifica información como confidencial es importante someterlo al Comité de Transparencia, quien debe confirmar, modificar o revocar la clasificación, por lo que el acuerdo respectivo, deberá hacerse del conocimiento del Recurrente.

Con base en lo expuesto, se insiste que los datos mencionados, que como se ha dicho, deben ser clasificados como confidenciales por tratarse de información privada, toda vez que los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo tanto, los sujetos obligados no deben hacer entrega de éstos a persona ajena a su titular, sobre todo cuando se ponga en riesgo la vida o integridad de una persona.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis jurisprudenciales *P. LX/2000* y *2a. XLIII/2008*emitidas por el Peno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que son del tenor literal siguiente:

***“DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.*** *El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado,* ***restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva****; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas,* ***mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados****.”*

***“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.*** *El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia,* ***el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente,*** *la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.”*

De tal forma que este Instituto estima que el Sujeto Obligado incumplió lo establecido en la Ley de la Materia, por lo cual es procedente modificar la respuesta a la solicitud del particular y ordenar la entrega de la información precisada con anterioridad.

***De la versión pública***

Este Órgano Garante determina ordenar que la entrega de la información al **Recurrente** se haga en versión pública, esto es, omitiendo, eliminando o suprimiendo la información personal de cada funcionario público, susceptibles de ser clasificadas como confidencial o cualquier otro dato que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de dicha persona.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***IX****.* ***Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información* ***y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada****. Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

***Artículo 52.*** *Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.”*

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que efectúen deberá estar justificado en la Ley, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, con relación con el 38, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

*“****Artículo 22.*** *Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.*

*El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, en los casos siguientes:*

*I. Cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el consentimiento del titular.*

*II. Se trate de una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables...*

***Artículo 38.*** *Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.”*

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares y de los servidores públicos toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

En efecto, toda la información relativa a una persona física que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4 fracción XI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial, que debe ser protegida por el Sujeto Obligado, en ese contexto, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

Asimismo, de la versión pública deberá dejarse a la vista del **Recurrente** los siguientes elementos de información pública: monto total del préstamo, el **nombre del servidor público**, el cargo que desempeña, área de adscripción, número de empleado (sólo en caso de no arrojar datos personales).

Robustece lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2518 del Tomo XXII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, de rubro y texto siguientes:

*"****TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN II, Y 18, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD, AL TUTELAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SÓLO DE LAS PERSONAS FÍSICAS.*** *Si se toma en cuenta que la garantía constitucional indicada no implica que todos los sujetos de la norma siempre se encuentren en condiciones de absoluta igualdad, sino que gocen de una igualdad jurídica traducida en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado, se concluye que los artículos 3o., fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tutelar sólo el derecho a la protección de datos personales de las personas físicas y no de las morales, colectivas o jurídicas privadas, no violan la indicada garantía contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal distinción se justifica porque el derecho a la protección de los datos personales se refiere únicamente a las personas físicas por estar encausado al respeto de un derecho personalísimo, como es el de la intimidad, del cual derivó aquél. Esto es, en el apuntado supuesto no se actualiza una igualdad jurídica entre las personas físicas y las morales porque ambas están en situaciones de derecho dispares, ya que la protección de datos personales, entre ellos el del patrimonio y su confidencialidad, es una derivación del derecho a la intimidad, del cual únicamente goza el individuo, entendido como la persona humana."*

Por ende, en el presente caso el Sujeto Obligado sólo podrá testar los datos referidos con antelación, clasificación que tiene que efectuar mediante las formalidades que la Ley impone, es decir, resulta necesario que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado emita el Acuerdo de Clasificación correspondiente debidamente fundado y motivado, que sustente la versión pública, el cual deberá cumplir cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como con los numerales aplicables de los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas**, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, mediante Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lo anterior es así, puesto que ha de destacarse que el artículo 91, de la Ley de la Materia, dispone que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.

En caso específico, de los documentos solicitados obran datos que son considerados confidenciales, cuyo acceso debe ser restringido, los cuales deben testarse al momento de la elaboración de versiones públicas, como es el caso del **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**, la **Clave Única de Registro de Población (CURP)**, la **Clave de cualquier tipo de seguridad social** (**ISSEMYM**, u otros).

Por cuanto hace al **Registro Federal de Contribuyentes de las personas físicas** constituye un dato personal, ya que se genera con caracteres alfanuméricos obtenidos a partir del nombre en mayúsculas sin acentos ni diéresis y la fecha de nacimiento de cada persona; es decir la primera letra del apellido paterno; seguida de la primera letra vocal del primer apellido; seguida de la primera letra del segundo apellido y por último la primera letra del nombre, posterior la fecha de nacimiento año/mes/día y finalmente la homoclave; la cual para su obtención es necesario acreditar personalidad, fecha de nacimiento entre otros con documentos oficiales.

Al respecto, el Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través del Criterio 19/17, señala literalmente lo siguiente:

*“****Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas****. El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.*

De lo anterior, se desprende que el Registro Federal de Contribuyentes se vincula al nombre de su titular, permitiendo identificar la edad de la persona, fecha de nacimiento, así como su homoclave, determinando la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que éste constituye un dato personal que concierne a una persona física identificada e identificable en términos de los artículos 2 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Por cuanto hace a la **Clave Única de Registro de Población**, constituye un dato personal, ya que tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, la cual servirá para identificarla de manera individual.

Lo anterior, tiene sustento en los artículos 86 y 91, de la Ley General de Población, la cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 86.*** *El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.*

***Artículo 91.*** *Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.”*

Ahora bien, la Clave Única de Registro de Población, está integrada de 18 elementos representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en un documento probatorio de identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio), la cual se integra de la primera letra del apellido paterno; seguida de la primera letra vocal del primer apellido; seguida de la primera letra del segundo apellido y por último la primera letra del nombre; fecha de nacimiento año/mes/día; sexo; Entidad Federativa o lugar de nacimiento; finalmente un digito verificador, compuesto de dos elementos, con el que se evitan duplicaciones en la Clave, identifican el cambio de siglo y garantizan la correcta integración.

Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través del Criterio 18/17, señala literalmente lo siguiente:

***Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.*

De lo anterior, se desprende que la Clave Única de Registro de Población, se encuentra vinculada al nombre de la persona, permitiendo identificar la edad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, así como el código identificador; datos que únicamente le atañen a un particular, por lo que ésta constituye un dato personal que concierne a una persona física identificada e identificable en términos de los artículos 2 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Por cuanto hace a la **Clave de cualquier tipo de seguridad social** (ISSEMYM, u otros), está integrado por una secuencia de números con los que se identifica a los trabajadores que cubren las cuotas respectivas, asimismo, lo identifica con la fuente de trabajo; por lo que al ser una clave de identificación de los trabajadores, constituye información confidencial, dato que únicamente le atañe al servidor público, por lo que constituye un dato personal que concierne a una persona física identificada e identificable en términos de los artículos 2 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Igualmente, resulta importante destacar que el ***número de cuenta bancaria* de las personas físicas** es información que sólo su titular o personas autorizadas poseen para el acceso o consulta de información patrimonial, o para la realización de operaciones bancarias de diversa naturaleza, por lo que la difusión pública del mismo facilitaría la afectación al patrimonio del titular de la cuenta.

Por lo anterior, el número de cuenta bancaria debe ser clasificado como confidencial con fundamento en las fracciones I y II del artículo 143 de la Ley de la Materia de la Entidad; en razón de que, con su difusión se estaría poniendo en riesgo la seguridad de su titular.

Además de que, la publicidad de los números de cuenta bancaria de los particulares en nada contribuye a la rendición de cuentas, sino por el contrario, dar a conocer los números de las cuentas bancarias hace vulnerable a las personas físicas, al abrir la posibilidad de que terceros que cuenten con las posibilidades tecnológicas y/o económicas puedan realizar actos ilícitos mediante operaciones cibernéticas; en esa virtud, este Instituto determina que dicha información no puede ser del dominio público, toda vez que se podría dar un uso inadecuado a la misma o cometer algún ilícito o fraude en contra del patrimonio de los particulares.

En esa virtud, este Pleno determina que dicha información no puede ser del dominio público, toda vez que se podría dar un uso inadecuado a la misma o cometer algún ilícito o fraude como ya ha sido expuesto.

Es por esta razón que se debe omitir el o los números de cuentas bancarias de particulares en las versiones públicas, para ser entregadas.

Lo anterior, no es así tratándose de las cuentas bancarias o claves interbancarias de los Sujetos Obligados ya que su publicidad cede a la rendición de cuentas al transparentar la forma en que son administrados los recursos públicos.

Lo argumentado encuentra sustento en los criterios 10/17 y 11/17 emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que llevan por rubro y texto los siguientes:

***“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas.****El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

***Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o transfieren recursos públicos, son información pública****. La difusión de las cuentas bancarias y claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos públicos, razón por la cual no pueden considerarse como información clasificada.”*

Por ende, en el presente caso el Sujeto Obligado debe atender las disposiciones en materia de protección de datos, a fin de salvaguardar los datos de particulares testando estos y emitir el debido Acuerdo que sustente la versión pública que se genere, ya que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que es necesario que el Sujeto Obligado cuando clasifique un documento, ya sea en todo o en parte, debe atender lo dispuesto por la Ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros, de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de la información, para que luego ésta se presente ante el Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

Así, es que el Sujeto Obligado deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; máxime que de conformidad con lo establecido en las Leyes y Lineamientos citados, para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley que expresamente le otorga el carácter de confidencial.

Ello, sin pasar por alto que la clasificación respectiva tiene que cumplirse mediante las formalidades impuestas por la ley; es decir, mediante Acuerdo debidamente fundado y motivado, en términos de los numerales 49, fracción VIII, y 132, fracciones I, II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

*“****Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

*…*

***VIII****. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

*I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

*II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

*III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.”*

*“****Segundo****.- Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

*…*

***XVIII****. Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Cuarto****. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto****. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los Sujetos Obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto****. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos.*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público.*

***Séptimo****. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II****. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*

***III****. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo****. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

*Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.*

*Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.*

***Noveno****. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo****. Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre Sujetos Obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.”*

De este modo, como ha sido señalado en la presente resolución, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de particulares mediante el debido Acuerdo fundado y motivado en el que el Sujeto Obligado precise las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo, es claro que el mismo debe aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y no hacerlas valer de manera general. Es importante señalar que, para acreditar dichos supuestos jurídicos se debe fundar y motivar correctamente la categorización de la información.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado que la sustente, en el que se expongan los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que el no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos, ya sea porque se testan o suprimen, deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por **El** **Recurrente**, por ello con fundamento en el artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información **00012/FAAPAUAEM/IP/2023,** que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado.

**S E R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por **El** **Sujeto Obligado**, a la solicitud de información número **00012/FAAPAUAEM/IP/2023,** por resultar parcialmente fundados los motivos de inconformidad que arguye el Recurrente, en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado** haga entrega al **Recurrente,** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución, de lo siguiente:

1. *La versión pública del expediente formado con motivo del préstamo realizado por la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), al Titular del Órgano Interno de Control referido en la solicitud de información número 00012/FAAPAUAEM/IP/2023.*
2. *El Acuerdo del Comité de Transparencia por medio del cual clasifique en su totalidad como CONFIDENCIAL* *en términos de los artículos 122 y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, del documento en donde* *conste del padrón de ahorradores de la caja de ahorro del Sujeto Obligado, así como de las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados al mismo.*

*Como sustento de la versión pública, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia correspondiente, en términos del artículo 49, fracción VIII y 132 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo y se ponga a disposición del* ***Recurrente****.*

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución al **Recurrente** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, y hágase del conocimiento, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con lo establecido en los artículos 159 y 160, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO ACORDÓ, POR MAYORÍA DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO DISIDENTE) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA (EMITIENDO VOTO DISIDENTE); EN LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/EJDG

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Tesis: I.1º.A.E.229 A (10ª), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 54, t. III, mayo de 2018, pág. 2487. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tesis: I.4º.A.17 K (10ª), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, t. 3, abril de 2013, pág. 2110. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tesis: P./J. 54/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, junio de 2008, pág. 743. [↑](#footnote-ref-4)
5. Registro, 2, 002,944. I.4o.A.40 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Pág. 1899 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://dpej.rae.es/lema/cuota-sindical#:~:text=Cantidad%20que%20abona%20el%20trabajador,por%20raz%C3%B3n%20de%20su%20afiliaci%C3%B3n>., consultado a las 10:08 horas del día 29 de marzo de 2023. [↑](#footnote-ref-6)